

# Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

SE SUSCRIBE

Todos los **Martes, Jueves y Sábados.**

En la Imprenta de Acosta, Fortaleza-21.



**PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.**

Año 1878.

MARTES 12 DE NOVIEMBRE.

Núm. 136.

## PARTE OFICIAL.

### GOBIERNO GENERAL

DE LA

ISLA DE PUERTO RICO.

#### SECRETARIA.

Por la Sub-secretaría del Ministerio de Ultramar, con fecha 12 del mes próximo pasado y bajo el número 391, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:— Por la Presidencia del Consejo de Ministros se dice al Sr. Ministro de Ultramar, con fecha 23 de Julio último, lo que sigue:— S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido expedir el Real Decreto siguiente:— Usando de la prerrogativa que me compete por el artículo 32 de la Constitución de la Monarquía, y de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros; Vengo en decretar lo siguiente:— Artículo único. Se suspenden las sesiones de las Cortes en la presente legislatura. — Dado en Palacio á veinte y tres de Julio de mil ochocientos setenta y ocho. — ALFONSO. — El Presidente del Consejo de Ministros, ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO. — De Real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—De la propia Real orden, comunicada por el referido Sr. Ministro de Ultramar, lo traslado á V. E. para su conocimiento.”

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 4 del corriente, de su Superior orden se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, Noviembre 7 de 1878.— El Secretario del Gobierno General, *Francisco Fontanals y Martinez.* [3287]

Por la Sub-secretaría del Ministerio de Ultramar, con fecha 12 del mes próximo pasado y bajo el número 392, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:— Por la Presidencia del Consejo de Ministros se dice al Sr. Ministro de Ultramar, con fecha 2 del actual, lo que sigue:— S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado expedir el Real Decreto siguiente:— En uso de la prerrogativa que me compete por el artículo 32 de la Constitución de la Monarquía, y conforme con el parecer de Mi Consejo de Ministros; Vengo en mandar que se reúnan las Cortes el día 30 del presente mes para continuar las sesiones suspendidas por Mi Decreto de 23 de Julio último. — Dado en Palacio á dos de Octubre de mil ochocientos setenta y ocho. — ALFONSO. — El Presidente del Consejo de Ministros, ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO. — De Real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos oportunos. — De la propia Real orden, comunicada por el referido Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento.”

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 4 del corriente, de su Superior orden se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, Noviembre 7 de 1878.—

El Secretario del Gobierno General, *Francisco Fontanals y Martinez.* [3286]

Por la Sub-secretaría del Ministerio de Ultramar, con fecha 9 del mes próximo pasado y bajo el número 393, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:— Por el Ministerio de Estado se dice á este de Ultramar, con fecha 7 del actual, lo siguiente:— Con objeto de cumplimentar lo prevenido en el Decreto de 25 de Setiembre último; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer se signifique á V. E. la conveniencia de que por ese Ministerio se encargue á los Gobernadores Generales de las Islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, que cuiden de avisar á este Centro el fallecimiento de los Caballeros del Collar de la Real y distinguida Orden de Carlos III ó grandes Cruces de la misma Orden que ocurran en sus respectivos Distritos, á fin de que pueda llevarse á efecto lo prevenido en el artículo 6º del mencionado Decreto. — De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Ultramar, lo traslado á V. E. para los efectos expresados.”

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 4 del corriente, de su Superior orden se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, Noviembre 7 de 1878.— El Secretario del Gobierno General, *Francisco Fontanals y Martinez.* [3288]

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, con fecha 23 de Setiembre último y bajo el número 387, comunica á este Gobierno General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:— Remitido á informe del Consejo de Estado en pleno el expediente instruido en este Ministerio sobre el proyecto de Decreto para llevar á efecto la separación de la fé pública judicial y extra-judicial y demás puntos suplementarios de la organización y régimen de los auxiliares de la Administración de Justicia en esa Isla, dicho alto Cuerpo lo evacuó en 28 de Abril de 1875 en la forma siguiente:— “Con Real orden, comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 3 de Abril corriente, se remitió á informe de este Cuerpo el expediente sobre organización en las Islas de Cuba y Puerto-Rico de la parte relativa á actuaciones judiciales y al nombramiento de los subalternos de los Tribunales. El Negociado correspondiente de ese Ministerio, en nota de 16 de Marzo último, con la cual está conforme la Dirección, después de exponer algunas consideraciones encaminadas á demostrar la necesidad y conveniencia de dictar reglas sobre los funcionarios que se dedican á auxiliar á los Tribunales en concepto de Relatores, Escribanos y Procuradores, ya que por lo que toca á los Notarios se dispuso lo necesario en la Ley y Reglamento vigentes de 25 de Octubre de 1873, cree que podría aprobarse el proyecto de Decreto que formula en quince artículos. A su tenor se confirma la prohibición establecida de enagenar Oficios, respetándose los derechos ad-

quiridos hasta el día 13 de Abril de 1870 en que se hizo aquella prohibición, en tanto que el Gobierno acuerda lo necesario á su reversion al Estado (artículos 1º y 2º): todos los Oficios que en adelante correspondan á la libre provision del Gobierno, se hará esta para los de Relatores como se dispone en las Ordenanzas de las Audiencias y para los Escribanos de Cámara y Procuradores en los individuos y con los trámites que determina (artículos 3º y 4º): previene que en cada Juzgado habrá el número de Escribanos que la Sala de Gobierno de la Audiencia respectiva considere preciso, determinando las formalidades de las convocatorias y los requisitos que han de reunir los que aspiren á estos cargos, siendo siempre preferidos los que renuncien á favor del Estado la propiedad de su Oficio adquirido á perpetuidad (artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10): los nombramientos se harán por el Ministerio de Ultramar (artículo 11): se confirma á los que actualmente desempeñan en interinidad los mencionados cargos, por virtud de lo dispuesto en la orden citada de 13 de Abril de 1870 (artículo 21): se establece la incompatibilidad entre las fées judicial y extra-judicial para los Oficios provistos con posterioridad al 1º de Abril de 1874 en que empezó á regir la Ley del Notariado (artículo 13): se derogaron todas las disposiciones que se opongan á este Decreto, y se previene por fin que las Audiencias dictarán las medidas que estimen necesarias para su exacto cumplimiento (artículos 14 y 15). No cree el Consejo oportuno entrar en el exámen de las disposiciones contenidas en el anterior proyecto de Decreto: la materia es de suma importancia: trasciende á derechos respetabilísimos, y por tanto conviene á su juicio resolver en su totalidad y bajo sus diversos aspectos las cuestiones que de ella se originan, pues de otra manera en vez de aclarar y facilitar la ejecución de lo que se previniese sobre el particular, se aumentaría la confusión de que ha solido adolecer, lo mismo en Ultramar que en la Península, la legislación sobre Oficios enagenados y de Justicia. La Ley del Notariado y el Reglamento dictado para su ejecución establecieron ya los principios cardinales á que en este punto era preciso obedecer; después se publicaron los Decretos de 25 de Febrero y 19 de Diciembre del año próximo pasado, encaminados principalmente á fijar reglas y trámites para llegar á la reversion al Estado de los diversos Oficios enagenados, declarando la indemnización que á sus propietarios correspondiese: falta dictar otras disposiciones complementarias, ya sobre el ejercicio de la fé judicial no comprendida en la expresada Ley del Notariado, ya sobre demarcación del territorio, deberes, atribuciones, fianzas, nombramientos, constitución y régimen de los diversos auxiliares de la Administración de Justicia, todo en armonía no solo con las bases establecidas respecto de los Notarios, sino con aquellos en que descansa la organización de los Tribunales y de los procedimientos así penales como civiles. Para conseguir este objeto sin perjudicar derechos adquiridos y evitando introducir perturbaciones en la materia, es preciso dictar disposiciones que determi-

nen la transición del antiguo sistema al nuevo que se trata de plantear, y luego legislar para lo sucesivo en los términos que mas oportuno y acertado se crea; pues si ahora parcialmente se crean intereses y derechos cuando se trata de la organización completa y definitiva de este asunto, aparte de hallarse ya cohibida la acción de la Administración, tropezará con dificultades y conflictos de no poca entidad y de difícil solución. Las anteriores consideraciones son suficientes, en sentir del Consejo, para demostrar la conveniencia de que al arreglo, organización y régimen de los diversos funcionarios á que se refiere el Decreto que se propone por ese Ministerio, proceda la instrucción de un amplio expediente, en el cual, oyendo si así se juzga oportuno á las Audiencias respectivas y á los Colegios de Notarios, se reúnan todos los datos, antecedentes y noticias que es indispensable tener en cuenta sobre esta materia en los varios y diversos aspectos en que debe ser apreciada. Mientras esto tiene lugar, cree el Consejo que no pueden lesionarse los derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior, ni privarse á los poseedores de Oficios enagenados de las facultades que esta les otorga, sino en el caso de que, como se halla mandado, sean indemnizados real y efectivamente del Oficio en la forma y con los trámites y solemnidades que se han exigido hasta ahora, ya se trate de Oficios de Notario ó Escribano, ya de cualesquiera otros de diversa denominación, pues para ello concurren notorios motivos de equidad y de justicia que la Administración no puede desconocer ni olvidar; fuera de que la reforma ha de ser tanto mas duradera y permanente cuanto menos intereses perjudique y menos esperanzas legítimas defraude. Pero una vez fijado el camino de la transición, lo mismo que respecto á los Oficios reincorporados ya al Estado, ó que se reincorporen en lo sucesivo, la iniciativa y acción del Gobierno quedan completamente libres y desembarazadas de toda consideración y motivo que no sean el buen servicio y el orden y regularidad en esta materia; entónces cabe ya la provision libre por el mismo Gobierno de todos los Oficios, determinando al efecto los requisitos que han de concurrir en los diversos funcionarios y los trámites y reglas á que la provision ha de ajustarse, las cuales pueden ser ó las que fija el proyecto de ese Ministerio ú otras análogas, para asegurar no solo el buen desempeño de semejantes cargos, sino también la independencia é imparcialidad en su ejercicio. Resumiendo el Consejo su opinion, es de dictámen:— 1º Tomando por base lo determinado en los Decretos de 25 de Octubre de 1873, 25 de Febrero y 19 de Diciembre de 1874 y demás disposiciones que han venido dictándose para la reorganización del Notariado en las provincias de Ultramar; y á fin de introducir en esta importante materia la claridad de que hoy carece, se establezcan y fijen en un solo Decreto los preceptos conducentes á la separación de la fé pública judicial y extra-judicial, demarcación notarial, fianzas y demás puntos complementarios de la organización y régimen de los auxiliares de la Administración Justicia.— 2º Que mientras que en cada caso particular, no se